

**I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
JUSTIÇA E MEMÓRIA – I CIJUM**

DITADURAS NA AMÉRICA LATINA E NO MUNDO III

D615

Ditaduras na América Latina e no mundo III [Recurso eletrônico on-line] organização I Congresso Internacional de Justiça e Memória (I CIJUM): Universidade de Itaúna - Itaúna;

Coordenadores: Irineu Carvalho de Macedo Júnior, Regina Cândido Lima e Silva Santos e Renata Pinto Pereira - Itaúna: Universidade de Itaúna, 2023.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-65-5648-930-8

Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações

Tema: Enfrentando o legado das ditaduras e governos de matriz autoritária.

1. Direito. 2. Justiça. 3. Memória. I. I Congresso Internacional de Justiça e Memória (1:2024 : Itaúna, MG).

CDU: 34

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE JUSTIÇA E MEMÓRIA – I CIJUM

DITADURAS NA AMÉRICA LATINA E NO MUNDO III

Apresentação

Recientemente se llevó a cabo el importante evento presencial brasiliano, Congreso Internacional de Justicia y Memoria (I CIJUM), esto es, el 02 de diciembre de 2023 y que tuvo como temática: “Enfrentando el legado de dictaduras y gobiernos autoritarios”. El mismo que fue organizado por la Universidad de Itaúna (UIT), a través de su Programa de Pos- graduación en Derecho, con el apoyo del Consejo Nacional de Investigación y Pos- graduación en Derecho (CONPEDI).

Es de resaltar plausiblemente la temática elegida para el mismo. Ello, en tanto que, si no se tiene memoria de lo ocurrido o no se aprende de lo vivido, lo que corresponde penosamente es, repetir los hechos acaecidos, tantas veces, hasta cuando se haya asimilado las enseñanzas dejadas por la historia.

Por ello, la historia es la ciencia que se encarga del estudio de los eventos y procesos del pasado y presente. Para esto, hace una recopilación de documentos o pruebas de los fenómenos sociales y culturales que permiten su reconstrucción y su análisis. Su objetivo principal es estudiar, indagar, comprender e interpretar lo que ha ocurrido en la humanidad, para así entender y aprender de esos hechos y por supuesto no repetir los errores que han ocurrido.

Pero quizá el elemento más significativo por el que aprender historia es importante es que esta materia ayuda a pensar. Las vueltas que han dado las sociedades desde la prehistoria hasta la actualidad han profundizado en la diversidad, en la contradicción, en el uso del poder para imponer y conocer cuáles han sido esos caminos nos ayuda a consolidar nuestro propio criterio sobre la sociedad. Algunos teóricos señalan que la historia es como una rueda de molino que siempre vuelve. Conocer nuestra identidad como personas y sociedades y encaminar nuestros pensamientos hacia esa diversidad son las claves para forjarnos un futuro mejor.

Conocer la historia no nos hará infalibles, ni evitará la reiteración de errores, ni nos anticipará el mañana; pero gracias al estudio de la historia podremos pensar críticamente nuestro mundo y tendremos en nuestras manos las herramientas para entender las raíces de los procesos actuales y los mapas para orientarnos en las incertidumbres del futuro. Desatender la historia

no nos libra de ella, simplemente regala el control. Las personas somos seres narrativos e históricos; ambos rasgos son intrínsecos a nuestra identidad.

Al hablar de historia, resulta imperativo dejar constancia, que, para entender y aprender de la misma, es preciso atender una mirada trífrente. Esto es, que es necesario abordarla desde el enfoque del pasado, del presente y del futuro.

Así, el presente evento se sitúa en el enfoque de lo ocurrido en el pasado, a efectos de aprender de ello y como consecuencia, nutrirse del aprendizaje respectivo. Dicho de manera específica: entender la historia, para no solamente no olvidarla, sino que, además, para garantizar que las dictaduras y gobiernos autoritarios, no vuelvan a repetirse o tener un mejor desempeño en rol fiscalizador de la población al gobierno de turno. Para finalmente, lograr o garantizar el abrace de la justicia.

Y es que la universidad, no solamente tiene por quintaescencia, la investigación y retribución de ciencia y tecnología hacia la población (además, de constituirse en un derecho fundamental, reconocido en la Constitución Política). Entonces, la universidad debe generar conciencia, análisis, para luego de ello, ejercer de manera inmejorable el control del Estado, a través del acertado ejercicio de los derechos fundamentales, a la transparencia y acceso a la información pública, a la rendición de cuentas, a no deber obediencia a un gobierno usurpador, a la protesta ciudadana pacífica sin armas, por citar solo algunos.

Ello, sin dejar de lado la trascendencia del método histórico en la investigación. Y es que sin investigación no existe vida universitaria, equivaldría a una estafa, a “jugar a la universidad”.

El método histórico es propio de la investigación histórica y con él se pretende, a partir del estudio y análisis de hechos históricos, encontrar patrones que puedan dar explicación o servir para predecir hechos actuales (pero nunca a corto plazo). Y se caracteriza por: i) Inexistencia de un único método histórico, ii) No genera predicciones a corto plazo, iii) Busca no solo contar la manera en que sucedieron los acontecimientos del pasado, también se centra en establecer hipótesis sobre por qué llegaron a suceder, lo que hace que muchos no consideren la historia como una ciencia al uso, ya que no establece absolutos, iv) Sus investigaciones se basan en fuentes de la época ya sean libros, documentos, diarios, enseres personales, v) Deben contrastarse las fuentes utilizadas y cerciorarse de que son realmente veraces.

Por ello, la historia se escribe constantemente a medida que vamos encontrando nuevos hallazgos. Hallazgos de los que debe quedar constancia, como expone el escritor Oscar

Wilde: “El único deber que tenemos con la historia es reescribirla”. Y Posiblemente, la razón de mayor peso para la importancia de la historia sea que, al conocerla y estudiarla, nos permite aprender a pensar y razonar por nuestra cuenta. Mientras más conocemos qué sucedió antes de nuestro tiempo, y cómo hemos llegado a la actualidad, con más argumentos contaremos para llegar a conclusiones propias con base en ello. Una habilidad que sin duda constituye un aprendizaje en diferentes aspectos de nuestras vidas.

En ese orden de ideas, deviene en imprescindible conocer, analizar la historia, para poder defender la democracia, el libre desarrollo de los pueblos, por ejemplo. Aunque, si bien es cierto, no necesariamente es lo mejor, es lo mejor que tenemos. Y los problemas de la democracia, deben ser enfrentados con más y mayor democracia.

Lo señalado no resulta ser de aplicación sencilla o menor, puesto, que por filosofía se sabe que el ser humano es marcadamente anti democrático, en vista de su naturaleza jerárquica y territorial.

En consecuencia, la relevancia que reviste el presente Congreso Internacional, cobra mayores ribetes y trascendencia.

Amerita, resaltar el rotundo éxito y tremenda acogida, por parte de conferencistas y asistentes. Es de apostrofar también, la masiva recepción de los casi 200 capítulos que formarán parte de los e- Book respectivos.

Por ello, felicitamos muy de sobremanera a los señores miembros de la Coordinación General, Profesores Dres. Faiçal David Freire Chequer, Márcio Eduardo Senra Nogueira Pedrosa Morais, Fabrício Veiga Costa, Deilton Ribeiro Brasil y Secretaria Executiva Dres. Caio Augusto Souza Lara y Wilson de Freitas Monteiro.

Así también, expreso mi profundo agradecimiento a mi amigo, el renocido jurista, Dr. Deilton Ribeiro Brasil, por haberme extendido la generosa invitación a elaborar las presentes líneas, a modo de presentación.

Finalmente, hacemos votos, a efectos que se continúen llevando a cabo eventos de tan gran trascendencia, como el bajo comentario, con el objetivo de fomentar la investigación, mejorar el sentido crítico de los estudiantes, procurar mejores destinos y plausible evolución de los pueblos, evitar nuevas dictaduras, gobiernos autoritarios, entre otros; sobre todo, en estos tiempos en los que la corrupción se ha convertido de manera muy preocupante y peligrosa, en un lugar común.

Arequipa, a 19 de enero de 2024

JORGE ISAAC TORRES MANRIQUE

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisdom (Nigeria). Consultor jurídico. Abogado por la Universidad Católica de Santa María (Arequipa). Doctorados en Derecho y Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima). Presidente de la Escuela Interdisciplinaria de Derechos Fundamentales Praeeminentia Iustitia (Perú). Autor, coautor, director y codirector de más de ciento veinte libros, en diversas ramas del Derecho, desde un enfoque de derechos fundamentales e interdisciplinario, publicados en 15 países. Codirector de los Códigos Penales Comentados de Ecuador, Colombia, Chile y Panamá.

EXECUÇÃO PENAL NA DITADURA MILITAR: REPRESSÃO POLÍTICA E REFORMAS LEGAIS

PENAL EXECUTION DURING THE MILITARY DICTATORSHIP: POLITICAL REPRESSION AND LEGAL REFORMS

Stefhanie De Paula Soares Furtado ¹
Ebert Soares Caldeira ²

Resumo

Este trabalho visa tratar sobre a execução penal na ditadura militar, o que desembocou na Lei de Execuções Penais, após contínuo esforço por parte de juristas e representantes do povo, a chamada “LEP” desempenhou um papel importante na promoção dos direitos e garantias fundamentais após a transição para um regime político democrático. Para alcançar esse objetivo, é essencial compreender a origem e a evolução dessa Lei. Além disso, é crucial destacar os eventos e circunstâncias que marcaram esse período, incluindo a transformação do cenário político Latino-americano e Brasileiro naquela época.

Palavras-chave: Lei de execuções penais, ditadura, Repressão política, Reformas legais, Violações dos direitos humanos, Transição democrática

Abstract/Resumen/Résumé

This work aims to deal with penal execution in the military dictatorship, which resulted in the Penal Executions Law, after continuous effort on the part of jurists and representatives of the people, the so-called “LEP” played an important role in promoting fundamental rights and guarantees after the transition to a democratic political regime. To achieve this objective, it is essential to understand the origin and evolution of this Law. Furthermore, it is crucial to highlight the events and circumstances that marked this period, including the transformation of the Latin American and Brazilian political scenario at that time.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Keywords: penal execution law, Dictatorship, political repression, Legal reforms, Human rights violations, Democratic transition

¹ Graduanda em Direito Pela Universidade Federal de Minas Gerais

² Graduando em Direito Pela Universidade Federal de Minas Gerais

EXECUÇÃO PENAL NA DITADURA MILITAR: REPRESSÃO POLÍTICA E REFORMAS LEGAIS

PENAL EXECUTION DURING THE MILITARY DICTATORSHIP: POLITICAL REPRESSION AND LEGAL REFORMS

Ebert Soares Caldeira

Stefhanie de Paula Soares Furtado

RESUMO

Este trabalho visa tratar sobre a execução penal na ditadura militar, o que desembocou na Lei de Execuções Penais, após contínuo esforço por parte de juristas e representantes do povo, a chamada “LEP” desempenhou um papel importante na promoção dos direitos e garantias fundamentais após a transição para um regime político democrático. Para alcançar esse objetivo, é essencial compreender a origem e a evolução dessa Lei. Além disso, é crucial destacar os eventos e circunstâncias que marcaram esse período, incluindo a transformação do cenário político Latino-americano e Brasileiro naquela época.

Palavras-chave: Lei de Execuções Penais. Ditadura. Repressão Política. Reformas Legais. Violações dos Direitos Humanos. Transição Democrática.

ABSTRACT

This work aims to deal with penal execution in the military dictatorship, which resulted in the Penal Executions Law, after continuous effort on the part of jurists and representatives of the people, the so-called “LEP” played an important role in promoting fundamental rights and guarantees after the transition to a democratic political regime. To achieve this objective, it is essential to understand the origin and evolution of this Law. Furthermore, it is crucial to highlight the events and circumstances that marked this period, including the transformation of the Latin American and Brazilian political scenario at that time.

Keywords: Penal Execution Law. Dictatorship. Political Repression. Legal Reforms. Human Rights Violations. Democratic Transition.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Ditadura militar, como bem se sabe, provocou violações graves dos direitos humanos, em especial aos direitos dos reclusos, incluindo a falta de garantias processuais e o uso da tortura. Além disso, é fundamental destacar os eventos e circunstâncias desse período, como a Guerra Fria e o contexto geopolítico, que influenciaram a política latino-americana.

O Brasil não estava isolado, e a ditadura militar foi parte de um padrão de regimes autoritários na América Latina, muitos dos quais também violaram os direitos humanos, tal ocorrido culminou em consequências de longo alcance e impactos duradouros nas instituições e na sociedade, compreender o papel da legislação nesse contexto é fundamental para identificar áreas em que reformas são necessárias, a fim de assegurar que tais violações não se repitam no futuro. Essa compreensão contribui para a construção de um sistema mais justo, transparente e condizente com um Estado Democrático de Direito.

A partir da década de 1980, com o processo de redemocratização do Brasil e a mudança no cenário político latino-americano, houve uma crescente pressão por reformas no sistema jurídico e no respeito aos direitos humanos. Isso levou a uma revisão da situação carcerária no Brasil, buscando alinhar o país com os princípios democráticos e os tratados internacionais de direitos dos apenados.

No tocante à metodologia da pesquisa, o presente resumo expandido utilizou, com base na classificação de Gustin, Dias e Nicácio (2020), a vertente metodológica jurídico-social. Com relação ao tipo genérico de pesquisa, foi escolhido o tipo histórico-jurídico. Por sua vez, o raciocínio desenvolvido na pesquisa foi predominantemente dialético. Quanto ao gênero de pesquisa, adotou-se a pesquisa teórica-bibliográfica.

2. PERSPECTIVA HISTÓRICA DO REGIME NA AMÉRICA LATINA

No século XX, após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), e durante o período da Guerra Fria (1946-1989), que polarizou o mundo entre o bloco capitalista (liderado pelos Estados Unidos da América) e o bloco socialista (liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), a América Latina testemunhou uma série de regimes autoritários, muitos dos quais liderados por militares, baseado na “Doutrina de Segurança Nacional”, uma abordagem ideológica centrada na ideia de “combate ao inimigo”, com forte influência norte-americana, em virtude do temor do avanço das ideias socialistas.

Essas ditaduras se concentraram principalmente na região do Cone Sul do continente, abrangendo países como Brasil, Chile e Argentina, respectivamente, entre 1964 e 1985, 1973 e 1990, e 1976 e 1983. No Brasil, aproveitou-se de um período de crescimento econômico global para implementar políticas de modernização da economia, frequentemente mantendo o Estado ativo em setores-chave através de empresas estatais. Isso desencadeou um ciclo de expansão econômica, mas também acarretou em níveis elevados de desigualdade e repressão política.

Por contraste, a Argentina não teve a mesma sorte econômica. Ao chegar ao poder, o país já enfrentava desafios econômicos, agravados pela repressão brutal e pelo desaparecimento de opositores políticos, o que levou ao seu isolamento internacional. A derrota na Guerra das Malvinas em 1982 acelerou o colapso do regime. No Chile, após uma recessão inicial, a ditadura de Pinochet adotou políticas econômicas neoliberais inspiradas na Escola de Chicago, modernizando a economia do país, porém à custa da redução dos direitos sociais e da imposição da repressão. Dessa forma, tanto o Brasil quanto o Chile e a Argentina passaram por diferentes trajetórias econômicas e políticas. Porém, elas compartilhavam muitas semelhanças em termos de repressão política, violações dos direitos humanos e intervenção militar no governo.

Com o apoio dos Estados Unidos, esses governos militares estabeleceram uma rede de comunicação entre si, com o objetivo de eliminar qualquer forma de oposição, especialmente de origem comunista, denominada como “Operação Condor”. Para atingir esse objetivo, essa operação envolveu a detenção de muitos opositores do regime, reduzindo ou excluindo as garantias formais comuns de um processo penal regular, violando, assim, o princípio do “Devido Processo Legal”, princípio jurídico fundamental que garante que qualquer indivíduo tenha direito a um processo legal justo e adequado antes de ser privado de seus direitos. Isso resultou em perseguições, prisões

arbitrárias, tortura e assassinatos de opositores políticos, que eram considerados “inimigos” da nação e frequentemente rotulados como “subversivos” da ordem. Muitos desses indivíduos eram submetidos a exílios forçados em outros países da América Latina. Nesse modelo de perseguição penal, que se assemelha ao conceito de “Direito Penal do Inimigo” proposto por Gunther Jakobs, um teórico jurídico que argumenta que a perspectiva do inimigo não o considera como pessoa portadora de direitos, mas como fonte de perigo, dentre as graves violações dos direitos humanos, a tortura era justificada e utilizada como uma forma de punição extrema, operacionalmente, enfraquecer as convicções políticas e dar segurança para a parcela da sociedade que apoiava o regime.

Nesse sentido, como forma de conferir legalidade e normatizar seus atos de repressão, os regimes autoritários da América Latina criaram um aparato legal, os Atos Institucionais (AI), os quais se originaram no Brasil e se difundiram para outros países da região. Eles eram regidos pelos comandantes dos Exércitos, da Marinha e da Aeronáutica ou pelo Presidente da República e sobrepunham como regras acima da própria Constituição Federal. O Ato Institucional nº 5 (AI-5) no Brasil, foi um dos Atos Institucionais mais marcantes. Introduzido em 1968, este ato conferiu amplos poderes ao governo militar, permitindo a suspensão de garantias constitucionais, o fechamento do Congresso Nacional e a censura da imprensa. Algumas das principais garantias suspensas pelo AI-5 incluíam: suspensão do habeas corpus, que é um instrumento legal fundamental para proteger os indivíduos contra prisões arbitrárias e ilegais. Com o habeas corpus suspenso, as autoridades poderiam deter pessoas sem ter que justificar legalmente a prisão. Inviolabilidade do domicílio que autorizava operações de busca e apreensão sem mandado judicial, permitindo que as autoridades entrassem nas residências das pessoas sem necessidade de justificação legal e a suspensão de mandatos políticos. Vários parlamentares e políticos que eram opositores ao regime tiveram seus mandatos suspensos ou foram cassados, o que enfraqueceu a representação democrática. Dessa forma, o processo de expansão punitiva ganha força através dos discursos que relacionam repressão política e segurança nacional por meio de estruturas normativas que asseguram o funcionamento político-criminal autoritário, justificador de uma aplicação desigual e instrumental do Direito Penal nas Ditaduras Militares, usado seletivamente para perseguir e punir indivíduos com base em critérios políticos, em vez de seguir princípios de justiça e igualdade perante a lei, levando à punição,

silenciamento e morte de inúmeras pessoas que buscavam promover a restauração da democracia.

Contudo, na década de 70, a pressão sobre os governantes para o fim do regime autoritário aumentou significativamente, movimentos de resistência popular, partidos políticos, sindicatos e movimentos estudantis organizados ganharam força, enquanto as políticas ditatoriais fracassaram em promover a inclusão social e a recuperação econômica. E é diante desse cenário em que os regimes militares na América Latina enfrentam um declínio em sua autoridade e poder político, que se estabelece uma comissão para reforma do sistema penal, no intuito de conceder o mínimo de abertura possível para manter o controle nas mãos dos militares para que esses mantivessem seu poder e autoridade durante a transição para um regime democrático, permitindo-lhes conduzir o processo de democratização de acordo com seus interesses e necessidades.

3. A BUSCA POR MELHORES CONDIÇÕES CARCERÁRIAS

A vontade de criar um código que disporia sobre as normas relativas ao sistema penitenciário brasileiro são antigas. A matéria era incluída dentro do Código Criminal do Império até que, em 1933, o jurista Cândido Mendes de Almeida presidiu uma comissão que visava elaborar o primeiro código de execuções criminais da República. Todavia, o projeto não chegou a ser votado em virtude da instalação do Estado Novo, que suprimiu as atividades parlamentares.

Em 1957 foi sancionada a Lei nº 3.274, que "dispõe sobre Normas Gerais do Regime Penitenciário, em conformidade do que estatui o art. 5º, n.º XV, letra b, da Constituição Federal e amplia as atribuições da Inspetora Geral Penitenciária".

Com a necessidade de se atualizar a Lei 3.274/57, foi feito um "anteprojeto de código das execuções penais", elaborado pelo jurista Roberto Lyra em 1963. Já em 1970 foi apresentado o projeto do professor Benjamim Moraes Filho, o qual teve a colaboração de juristas como José Frederico Marques, e inspirava-se numa Resolução das Nações Unidas, datada de 30 de Agosto de 1953, que dispunha sobre as Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos.

Em 16 de setembro de 1976, foi aprovada a Comissão Parlamentar de Inquérito que tinha como objetivo fazer um levantamento do sistema penitenciário brasileiro, a qual teve como relator o jurista e deputado federal Ibrahim Abi-Ackel.

A comissão de inquérito apresentou diversos problemas da realidade carcerária brasileira. Entre eles as más condições dos reclusos, a superlotação dos presídios e a alta quantidade de reclusos ainda em investigação, além da grande quantidade de pessoas presas por pequenos delitos, como vadiagem.

Após a aprovação da CPI, foi também aprovada a Lei 6416/77. Tal lei foi histórica e representou uma mudança de paradigma, haja vista que instituiu uma série de mudanças no sistema carcerário, introduzindo-se também o sistema de execução em três regimes (fechado, semi-aberto e aberto). Entre estas, podemos citar a criação de estabelecimentos penais unicamente femininos e a diferenciação entre reclusos comuns e aqueles considerados perigosos. Em 1984, já no fim da Ditadura Militar, foi sancionada a Lei 7.210/84. Tal lei foi inovadora no contexto brasileiro, garantindo diversos direitos aos prisioneiros.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do analisado supra, ao refletir sobre os desafios enfrentados pela América Latina durante a ditadura militar e a subsequente transição para a democracia, é evidente que as violações dos direitos humanos e as questões relacionadas ao encarceramento desempenharam um papel significativo, também ocorreram importantes mudanças no sistema penal brasileiro, advindas, principalmente, dos nobres esforços de juristas e representantes do povo.

No entanto, as abordagens tradicionais para explicar esses fenômenos muitas vezes não consideram adequadamente a formação do Estado e as complexas realidades políticas e sociais da região. À medida que os Estados latino-americanos buscam consolidar democracias mais justas, surgem desafios relacionados à segurança pública e aos direitos dos presos, percebe-se, portanto, a importância da reivindicação de direitos e a busca por um sistema carcerário mais humanizado. Ocorre, atualmente, um grande e importante esforço para tal.

O sistema penal brasileiro, por exemplo, passou por mudanças importantes, mas ainda lida com questões como superlotação e garantias de direitos. Há, ainda, uma enorme diferença entre o previsto na Lei de Execuções Penais e o atualmente praticado. Espera-se que, com o decorrer do tempo, consiga-se significativa melhora, por isso, é crucial analisar as raízes históricas do encarceramento na América Latina, o impacto da

redemocratização nas instituições penais e as preocupações atuais sobre os direitos dos presos, especialmente em relação à jovem democracia brasileira

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barros, R. C. E. de. **Progressão de Regime**. 2008. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Lei No 6.416**, de 24 de maio de 1977. Altera dispositivos do Código Penal (Decreto-lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940), do Código de Processo Penal (Decreto-lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941), da Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei número 3.688, de 3 de outubro de 1941), e dá outras providências. Brasília: Câmara dos Deputados, 1977. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6416.htm. Acesso em: 20 out. 2023.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Lei No 7.210**, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Brasília: Câmara dos Deputados, 1984. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 20 out. 2023.

BRASIL. Congresso. **Comissão Parlamentar de Inquérito**. Relatório final da CPI destinada a investigar a situação do sistema penitenciário brasileiro. Diário do Congresso Nacional, Brasília, n. 61 (suplemento), 4 jun. 1976.

DE QUADROS, Ana Lúcia Dela-Pace. **Ensaio de criminologia sobre os crimes da ditadura**. Universitas Jus, v. 23, n. 2, 2012.

DE AZEVEDO, R. G. **Criminalidade e justiça penal na América Latina**. Sociologias, [S. l.], v. 7, n. 13, 2008.

Vivian Marina Araújo Guimarães, Nikaelly Lopes de Freitas, **AUTORITARISMO E ENCARCERAMENTO EM MASSA NA AMÉRICA LATINA**, Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos: v. 22 (2022).